

Editores: Fernando Carrión, Marcelo Corti,
Patricia Ramírez Kuri, Pedro Abramo

Editora general: Paulina Cepeda

El futuro de las ciudades



© 2022 FLACSO Ecuador
Julio de 2022

ISBN: 978-9978-67-611-0 (impreso)
978-9978-67-612-7 (e-pub)

FLACSO Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro, Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.edu.ec

Corrección de estilo:

Juana Garabano Caporossi; Martina Sipowicz

Apoyo editorial:

Emilia Silva; Mayra Dominguez

El futuro de las ciudades / editado por Fernando Carrión, Marcelo Corti,
Patricia Ramírez Kuri, Pedro Abramo y Paulina Cepeda. Quito : FLACSO
Ecuador, 2022

ix, 630 páginas : ilustraciones, figuras, gráficos, mapas, tablas

Incluye bibliografía

ISBN: 9789978676110 (impreso)

ISBN: 9789978676127 (e-pub)

PLANIFICACIÓN URBANA ; CIUDADES ; SOCIOLOGÍA URBANA ; POLÍTICA URBANA ; ECONOMÍA ; ZONAS URBANAS ; ESPACIOS PÚBLICOS ; URBANISMO ; DESARROLLO URBANO. I. CARRIÓN, FERNANDO, EDITOR II. CORTI, MARCELO, EDITOR III. RAMÍREZ KURI, PATRICIA, EDITORA IV. ABRAMO, PEDRO, EDITOR V. CEPEDA, PAULINA, EDITORA

307.76 - CDD

Índice

Presentación	ix
INTRODUCCIÓN	
El futuro de las ciudades	3
<i>Pedro Abramo, Marcelo Corti, Patricia Ramírez Kuri y Fernando Carrión M,</i>	
METRÓPOLIS GLOBALES	
Las ausencias en nuestros análisis	29
<i>Saskia Sassen</i>	
París 2021 - Trayectoria metropolitana y gobernanza Viejos problemas y nuevos desafíos	45
<i>Marie-France Prévôt-Schapira</i>	
Ciudad de México Espacio público y neoliberalismo urbano en tiempos de pandemia	61
<i>Patricia Ramírez Kuri</i>	
La gobernanza de las metrópolis y los desafíos de la inclusión: la trayectoria de São Paulo	89
<i>Eduardo Marques</i>	
Trayectoria, transformaciones e incertidumbres de la ciudad de Chicago a través de los cambios de régimen socioeconómico del capitalismo	107
<i>John Jairo Betancur</i>	
Un nuevo urbanismo de transformación y reciclaje de la ciudad existente: Proyecto Madrid Centro	125
<i>José María Ezquiaga</i>	

Historia y perspectivas del desarrollo urbano sostenible en Seúl.	151
<i>Federico Poore</i>	
Informalidad urbana en Corea del Sur	169
<i>Pedro Abramo y Arantxa Rodríguez</i>	
Los desafíos de la ciudad futura: Pospandemia, desarrollo urbano y derechos humanos.	201
<i>María Mercedes Di Virgilio</i>	
METRÓPOLIS CONTINENTALES	
Santiago, la pandemia neoliberal	215
<i>Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez</i>	
Bogotá, el futuro incierto al fragor de la sindemia metropolitana.	235
<i>Óscar Alfonso Roa</i>	
Montevideo, memoria y futuro	251
<i>Mariano Arana y Salvador Schelotto</i>	
Panamá metropolitana: entre espejismos y desigualdades.	263
<i>Magela Cabrera Arias</i>	
Caracas o la gobernabilidad metropolitana frustrada. Ideas para repensarla	287
<i>Carlos Mascareño Quintana</i>	
Retos y oportunidades del crecimiento de la Ciudad de Guatemala en el inicio del siglo XXI	303
<i>Jean Roch Lebeau</i>	
Quito: crónica de una crisis anunciada	321
<i>Fernando Carrión M. y Paulina Cepeda</i>	
CIUDADES DE INTERMEDIACIÓN	
Ressurgências do passado, emergências do presente e o futuro pós pândemico das cidades, indicações a partir do caso brasileiro e sua capital.	353
<i>Benny Schvarsberg y Neio Campos</i>	
Ciudad Juárez en el contexto actual: Recuperar la inteligencia de la ciudad para proyectar su futuro posible	365
<i>Luis Alfonso Herrera</i>	

Covid-19 na fronteira Brasil-Uruguai: ilegalismos e políticas públicas nas cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera	393
<i>Letícia Núñez Almeida y Camilo Pereira Carneiro</i>	
Centro, periferia y fuego Córdoba en discusión.....	409
<i>Marcelo Corti</i>	
Aproximaciones a las lógicas de apoyo mutuo en Cochabamba durante el confinamiento rígido por el Covid 19	425
<i>Juan E. Cabrera, José Martínez, Carla Quezada y Margoth Salazar</i>	
Asunción: Posibilidades para la gestión participativa en el gobierno local	447
<i>Ana Raquel Flores</i>	
DEBATES CENTRALES	
La ciudad neoliberal en América Latina	465
<i>Fernando Carrión M.</i>	
Por una teoría crítica del mercado del suelo urbano	493
<i>Samuel Jaramillo</i>	
La Ciudad por Partes El plan de sector como un instrumento de planificación para periferias complejas. Experiencias recientes en Córdoba, Argentina	509
<i>Fernando Díaz Terreno</i>	
Pensar la infraestructura urbana en América Latina.....	519
<i>Pedro Pérez</i>	
Producción social del hábitat en América Latina	533
<i>Enrique Ortiz</i>	
Historia y presente de las iniciativas de Producción Social del Hábitat desde el prisma del Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV): ¿Alternativa para la(s) desigualdad(es) urbana(s) en el contexto del COVID-19?	545
<i>María Mercedes Di Virgilio y Alejandro Lorences</i>	

DEBATES EMERGENTES

Ciudad, ciudadanías y expresiones solidarias en la producción urbana y en contextos de crisis sanitaria	571
<i>Yutzil Cadena</i>	
Espacio público y ciudadanía en la centralidad urbana.	579
<i>Vladimir Morales</i>	
Criar Paisajes Sanos. En busca de una ciudad mejor	589
<i>Karina Borja</i>	
Turismo urbano y COVID-19	605
<i>Victor Llugsha G.</i>	
Pandemia y Ciudades de Frontera.	613
<i>Francisco Enríquez Bermeo</i>	
¿Hacia dónde vamos?	623
<i>Valeria Reinoso Naranjo</i>	

Pandemia y Ciudades de Frontera

Francisco Enríquez Bermeo¹

La protesta social

A finales de 2019, América Latina experimentó una protesta social de magnitud que tuvo como escenario a varias ciudades de la región. Empezó en octubre en Quito, Ecuador, luego pasó a Santiago de Chile, a varias ciudades de Colombia, Perú, Haití, entre otros. Fueron movilizaciones que si bien tuvieron un hecho específico que las provocó, se trataban de protestas que cuestionaron principalmente dos aspectos:

- La democracia representativa, la que muestra signos de agotamiento en cuanto casi todos, por no decir todos, sus representantes políticos han perdido credibilidad, dado que, aún los más críticos, han pasado a formar parte del *establishment* y han dejado de ser una alternativa de cambio. De ahí que las protestas sociales demanden reformas políticas que combinen la democracia representativa con una democracia directa y participativa, con mayor poder de decisión por parte de la comunidad y con mecanismos de control sobre la erosionada clase política, en el marco de un Estado menos centralista y más territorializado.
- Un sistema económico de exclusión de buena parte de la sociedad, principalmente de jóvenes y de grupos históricamente subalternos (indígenas, afrodescendientes, mujeres), a consecuencia de una grave crisis expresada en desempleo, pobreza, exclusión, informalidad creciente, concentración cada vez mayor de la riqueza económica y una enorme

¹ Secretario Ejecutivo de OLACCIF e investigador de FLACSO.

corrupción entre políticos y algunas empresas privadas. El año 2019 la región tuvo uno de los peores desempeños en los últimos 70 años, con crecimiento económico nulo. Esta situación se agravó a partir del 2020 con la pandemia del COVID-19, cuyo resultado es decrecimiento de la economía de la región y engrosamiento de las pobreza y extrema pobreza con millones de familias que se incorporan.

Se trata de fenómenos estructurales presentes desde hace mucho tiempo, entre cuyas consecuencias importantes se pueden identificar el cambio climático y el deterioro ambiental, producto a la vez de la vigencia de un modelo de sociedad de tipo moderno europeísta, que privilegia el crecimiento económico basado en la acumulación de capital y la emisión desmedida de dióxido de carbono, y que ha creado una sociedad de consumo cuyo fin es obtener una tasa de ganancia ilimitada sobre la base de una creciente explotación de la fuerza de trabajo y de una reprimarización de las economías de los países de bajo desarrollo. Modelo que además, genera enormes cantidades de desechos que son arrojados en la tierra, mares y ríos que contaminan el planeta y provocan enfermedades pandémicas. Se trata de una crisis civilizatoria que demanda cambios inmediatos, muchos de ellos radicales.

Dichas movilizaciones se mantienen, aunque en algunos casos se mediatizaron, como fue el caso de Ecuador en donde gobierno y organizaciones indígenas en octubre de 2019 llegaron a un acuerdo, o como en el caso de Chile en donde se han efectuado dos procesos electorales para elaborar una nueva constitución. El caso de Colombia es diferente pues no se visualiza una salida, porque luego de más de dos meses de protestas no violentas y grandes movilizaciones por todas las ciudades de ese país, la única respuesta que han recibido los manifestantes por parte del Gobierno de Duque es una desproporcionada respuesta represiva y violenta, cuyo saldo es más de 50 muertes violentas a cargo de la policía y grupos paramilitares.

Inicialmente la pandemia neutralizó la protesta, pero luego se reactivó y en algunos casos incluso recrudeció, puesto que, como ya se anotó, la pandemia ahondó los problemas principalmente sobre los más vulnerables y en varios países los grupos de poder pretendieron cargar sobre las clases medias y populares el costo de la pandemia.

Decrecimiento y mayor empobrecimiento

Los gobiernos exigen de sus poblaciones aislamiento, alejamiento y paralización como medidas para contener los contagios, que a más de enfermedad y muerte de millones de personas, ha provocado una ralentización del crecimiento productivo y económico y la generación de la peor recesión de la historia regional de América Latina. La CEPAL (2021) sostiene que la economía de la región se contrajo en el año 2020 en 7,7 %, la mayor contracción de los últimos 120 años, y espera para el 2023 una recuperación que permita alcanzar el nivel pre pandemia (p.13). A ello se suma la enorme deuda externa de la región, principalmente de países como Argentina, Ecuador, los del Caribe y otros, que antes del COVID-19 ya era crítica y que ahora se ve acrecentada por la pandemia y los gastos que demanda su tratamiento.

En cuanto a las consecuencias sociales, la CEPAL sostiene que el desempleo pasó del 8,1 % al 10,7 %²; la pobreza en la región pasó de 30,5 % al 33,7 %, en donde 45,4 millones de personas se sumaron a esa situación hasta completar 231 millones; mientras que la pobreza extrema se incrementó del 11, 3% al 12,5 %, es decir aumentó en 28,5 millones, hasta alcanzar a 96,2 millones³. Los países en los que más se incrementa la pobreza son Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú.

A pesar de que los países de América Latina están catalogados como de ingreso medio, al tratarse de una de las regiones más desiguales del mundo⁴, las consecuencias sobre los más vulnerables son catastróficas⁵, más aún cuando muchos países cuentan con precarios sistemas públicos de salud, bienestar y protección social, que se han puesto en evidencia con las elevadas cifras de contagio y muertes. América Latina registra el

2 44,1 millones de personas están desocupadas desde 2020, que son 18 millones más de los que había en el año 2019.

3 Con base en las nuevas proyecciones de caída del PIB y el aumento de la desocupación, se estima que desde el 2020 hay 491 millones de personas (casi el 80 % de la población de la región) que forman parte de los estratos de ingresos bajos o medio-bajos.

4 De acuerdo a un estudio reciente del PNUD (2019), el 10% más rico acapara el 37% de los ingresos, mientras que el 40% más pobre recibe el 13% del total, brecha que supera incluso a la de África, todo ello a pesar de la reducción de la pobreza en los últimas décadas.

5 Más de 50% de la PEA en promedio trabaja en condiciones de informalidad y carece de sistemas de seguridad social, con países como Ecuador en donde esa cifra alcanza al 70%.

25' % de contagios a nivel mundial, pese a que su población representa el 10 % del total. En el caso de las muertes por COVID-19, el porcentaje es similar al de contagios.

La pandemia ha puesto en evidencia que no es posible que solo una parte de la sociedad pueda salvarse del contagio resolviendo sus problemas de salud, sino que se requiere de una respuesta global que incluya a toda la población de la humanidad, dado el elevado y rápido nivel de contagio. Como dice Isabel Allende, “lo que le pasa a un ser humano en Wuhan, le pasa al planeta, nos pasa a todos” (2020). Probablemente la vacuna reduzca su propagación, pero con muchas limitaciones por la capacidad de mutación en nuevas cepas y la posibilidad de que surjan posteriores epidemias ligadas a otros virus, dada que las causas que las provocan persisten. Ello exige a los gobiernos de manera urgente y prioritaria construir sistemas públicos de salud y protección social mucho más sólidos y eficaces, bien articulados nacional y regionalmente para contener los brotes epidémicos y proteger al conjunto de las sociedades. Construcción en donde los Estados nacionales y supranacionales (Sistema Integrado Centroamericano, Unión Europea y otros) tendrán rol preponderante, aunque no exclusivo, puesto que deberán incorporar a gobiernos locales y regionales, como también a la sociedad civil y una importante participación de los pueblos que mantienen prácticas de vida comunitaria y de salud ancestrales, como los pueblos indígenas y afrodescendientes.

América Latina tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas con 162 personas por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial tiene un tasa de 46, lo que da cuenta de una grave crisis sanitaria. Tasa tres veces mayor a la del mundo y cuyas consecuencias se expresan en contar (para mayo 2021) con cerca de un millón de muertos, lo que a criterio de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne: se trata de “una tendencia preocupante, porque los casos y las muertes se están estabilizando en niveles alarmantes” (En PAHO/WHO, 2021). Como se puede observar, el promedio regional de muertes por COVID-19 es alto respecto al mundo, pero este es mucho más alto en ciertos países en donde las condiciones de salubridad son precarias a consecuencia de un desmantelamiento sistemático del sistema público de salud. Ello se expresó en varias ciudades y territorios de la región en distin-

tos momentos como Guayaquil, Manaus, Arequipa, Medellín, Santiago, México, Sao Paulo, Buenos Aires, entre otras.

Pero más allá del impacto de la pandemia en la salud y la vida de la región, hay otro fenómeno muy peligroso que viene de la mano del primero y que empieza a tener presencia creciente. Se trata de la crisis alimentaria, que puede tener igual e incluso mayor impacto que la pandemia aunque más lento, puesto que se verá como otras enfermedades con el paso del tiempo, si no se responde con rapidez y eficacia. La CEPAL (2021) estima que en América Latina hay 5 millones de hogares, es decir cerca de 30 millones de personas, que están pasando hambre de manera creciente, para lo que es importante, además de entregar alimentos, avanzar hacia una política de renta básica que, permita mantener niveles de consumo adecuados que impidan un deterioro de las condiciones de vida y salud de los más vulnerables y a la vez permitan reactivar la economía y con ello el empleo, no para recuperar los niveles de consumo excesivo y suntuario, sino niveles de consumo que posibiliten una vivencia sobria, austera y saludable.

Soberanía, militarización y movilidad humana

A pesar de que durante este período han sido necesarias medidas de aislamiento, distanciamiento y de restricción a la circulación de las personas para contener los contagios, algunas de esas medidas deben ser temporales, hasta cuando pasen los momentos más críticos, para luego enfatizar en medidas de distanciamiento individual. Pero la mayoría de los países a más de las medidas mencionadas, las acompañaron de otras como el cierre y militarización de fronteras entre países, que fueron vistas como expresiones desesperadas por afirmar soberanía y poder de los Estados nacionales⁶. Con esas expresiones parecería que estamos de vuelta a nacionalismos, como si los Estados fuesen víctimas de agresiones externas, de otros que están por fuera de su espacio soberano. El COVID-19 no es un agresor externo a los

⁶ Los más afectados fueron los habitantes de ciudades o pequeños poblados fronterizos que trabajan, estudian, compran en la ciudad o poblado contiguo, quienes de un día para otro vieron interrumpida su vida.

Estados nacionales, es un agresor a la vida y a la salud de los seres humanos, que no distingue nacionalidades, razas, clases sociales, ni ideologías, sino que ataca a todos por igual. En esa medida lo que corresponde, luego de la fase crítica de aislamiento, no es mantener cerradas las fronteras, sino más bien cooperar intensamente entre Estados nacionales y sus distintos niveles de gobierno, principalmente vecinos o contiguos, para hacer frente de manera conjunta a la pandemia.

Ese tipo de acción complementaria entre Estados nacionales y de gobiernos multinivel, no significa dejar de adoptar medidas restrictivas a la circulación de personas, aislamiento, distanciamiento y otras, pero en espacios regionales transfronterizos. El espíritu soberanista no es solo un fenómeno de la región, sino que incluso Europa, que se supone es un Estado de Estados, cerró las fronteras entre sus miembros y los resultados dan cuenta de lo poco efectivas que fueron las medidas soberanistas adoptadas para enfrentar la pandemia.

Otro aspecto importante, vinculado con el anterior, tiene que ver con las acciones de control, en muchos casos violentas, de parte de los Estados nacionales sobre la sociedad. En nombre de la disciplina social que exige el combate a la pandemia, en algunos países se violaron los derechos humanos. Si bien es indispensable la disciplina social y la adopción de medidas de aislamiento y distanciamiento individual, que permitan tener una sociedad organizada inmunológicamente, es necesario establecer ciertos límites, puesto que no se puede vivir permanentemente rodeados de vallas y muros que limiten la circulación de personas y mercancías. Además, la adopción de esas medidas en muchos casos estuvieron cargadas de xenofobia, racismo, homofobia y otras fobias de carácter colonialista, no solo de parte de las fuerzas de control sino incluso de ciertos grupos de la sociedad contagiados de esas fobias ideológicas.

El riesgo es que ante el pánico de la pandemia se empiecen a estrechar desde el Estado los espacios de participación y ejercicio de la democracia, centralizando nuevamente el poder y restringiendo el derecho a la protesta, a la movilización y a la libertad de expresión. Ojalá que en nombre de la disciplina social que demanda el combate a la pandemia, no se llegue en ningún lugar del mundo a consolidar o establecer regímenes autoritarios y policiales de control amparados en cercos epidemiológicos. Si eso llegara

a suceder, entonces el estado de emergencia pasaría de ser una situación temporal a una permanente.

Refugiados, retornados, migrantes y trabajadores transfronterizos fueron, entre otros, las mayores víctimas del COVID-19 al ser impedidos de pasar al otro lado de la frontera, puesto que la mayoría, por no decir todos los países de la región, declararon el estado de emergencia, cerraron parcial o totalmente las fronteras y prohibieron la entrada de extranjeros no residentes en su territorio, e incluso impidieron el retorno de sus propios compatriotas. Si bien es indispensable que los Estados adopten medidas restrictivas de circulación humana en los momentos críticos, a nadie se le puede negar el derecho al trabajo, a la salud, a la protección social y peor aún el derecho a retornar a su propio país. Nadie puede ser condenado a la condición de apátrida⁷.

Pandemia y ciudades de frontera

Históricamente, el uso del espacio físico ha estado determinado por factores de salud y particularmente por las epidemias. El espacio urbano e incluso arquitectónico fue frecuentemente modificado, por ejemplo en el primer cuarto del siglo XX se construyeron escuelas al aire libre y hospitales con amplias terrazas para evitar el contagio de la tuberculosis y la llamada “gripe española”. La pandemia del cólera modificó radicalmente la estructura de las ciudades, reduciendo la densidad urbana e introduciendo grandes cambios en la infraestructura sanitaria. El COVID-19 ha rememorado la tuberculosis, y por su alto nivel de contagio se pide a la población quedarse en sus casas y recurrir al teletrabajo. El aislamiento y distanciamiento, si se quedan mucho tiempo entre nosotros, como parece ser, exigirán cambios en la arquitectura, en la planificación urbana y en el uso de los espacios públicos y privados, adecuándolos a las nuevas condiciones de sanidad.

Uno de esos espacios en el que habrá que pensar en modificarlo serán las ciudades de frontera, no cerrándolas y restringiendo su uso y circu-

⁷ Gobiernos locales como la Municipalidad de Arica, Chile, denunciaron ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que miles de ciudadanos peruanos fueron impedidos de ingresar a su propio país durante la pandemia. Casos similares acontecieron en Nicaragua.

lación, sino más bien manteniéndolas abiertas pero estableciendo cercos epidemiológicos y medidas de sanidad que impidan la propagación del virus, todo ello de manera concertada entre Estados nacionales, gobiernos locales de ciudades fronterizas y comunidades. La solidaridad y el auxilio demandan colaboración, concertación y manos entrelazadas, y no muros y barreras.

Las fronteras son lugares en donde confluyen dos o más Estados y contienen cultural y socialmente una parte importante de cada uno de esos lados, además de lo que cruza regularmente por ellas y que provienen de otros lugares de la región y el mundo. En esa medida, las fronteras son lugares distintos al resto de su país, aunque su principal influencia provenga de él; y además, al formar parte de un Estado, las distintas políticas nacionales, casi todas homogéneas, hacen que las ciudades de frontera y sus habitantes mantengan tensiones con esas políticas, muchas de ellas causantes de las grandes asimetrías entre fronteras.

Una importante enseñanza del COVID-19 es que las políticas públicas centralizadas en los Estados nacionales se han mostrado ineficaces, las cifras lo demuestran, al carecer de un enfoque territorial. Su respuesta ha sido centralista y sectorialista desde la salud curativa y la seguridad nacional, con fuerte énfasis en atención hospitalaria y control policial y militar sobre la sociedad, con ausencia de prevención sanitaria y acción comunitaria, en donde los gobiernos municipales tienen mucho que aportar por su cercanía con la población, por su mayor legitimidad social frente a gobiernos nacionales erosionados por la corrupción y además porque son el único espacio público estatal de entrelazamiento posible entre lo sectorial (centralizado) y lo territorial (descentralizado).

Las ciudades fronterizas son lugares estratégicos desde los cuales se pueden enlazar territorialmente las políticas de integración entre los países vecinos, representados no solamente por sus gobiernos nacionales sino, y principalmente, por sus gobiernos municipales y regionales, quienes pueden responder adecuadamente a sus propias poblaciones, a los trabajadores que todos los días cruzan la frontera; y además, atender a las poblaciones en tránsito, migrantes, desplazados y repatriados, quienes requieren de protección en salud, alimentación y cuidado. Para ello es indispensable cambiar la forma de operación de las fronteras, flexibili-

zando progresivamente el tránsito y el control, cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, y propiciando políticas y acciones prácticas transfronterizas que privilegien la vida.

Hasta ahora las fronteras entre países son lugares estrechos, embudos, por donde deben pasar y registrarse todas las personas y bienes que transitan de un país a otro. Las medidas de salubridad buscan evitar las aglomeraciones, para evitar los contagios, por ello el distanciamiento entre las personas en lugares como los puestos fronterizos y las fronteras en general, deben modificar su uso y funcionamiento. Ello no significa que no deba existir control y registro de todas las personas y bienes que por allí transitan, pero ese control y registro deben estar orientados a evitar la aglomeración y con ello la propagación de la enfermedad y la muerte de las personas. En esa medida, debe tratarse de un registro y control no localizado en un solo punto, sino más difuminado en el territorio fronterizo. El uso de nuevas tecnologías en el registro y control será indispensable a fin de evitar aglomeraciones y contagios.

Es urgente trabajar en propuestas que regulen el mercado laboral fronterizo, que es muy intenso en todas nuestras fronteras, en donde no se puede solo ver el interés de control de los gobiernos nacionales, sino observar también la funcionalidad de ese mercado del que viven miles de familias y empresas, tanto las que reciben servicios como las que pagan por los servicios prestados. Urge regular con visión transfronteriza el flujo migratorio constante, la situación de los refugiados e incluso de los que retornan a sus propios países, para evitar que sean víctimas de la violación de sus derechos humanos y ciudadanos a manos de gobiernos nacionales o de grupos criminales que controlan pasos fronterizos.

En la construcción de propuestas para regular el mercado laboral fronterizo y la migración, es indispensable no ver los problemas solo desde un lado de la frontera, sino verlos de manera integral, con visión transfronteriza. En esa perspectiva, el papel de los gobiernos locales de ciudades fronterizas es fundamental, dado que tienen una visión territorial de la gestión pública y no sectorial como la que se tiene desde el Estado nacional. Visiones que deben complementarse en una perspectiva de gestión de gobierno multinivel.

Bibliografía

- Allende, Isabel (8 de junio 2020). El mundo que viene: escritora Isabel Allende espera que la pandemia marque el fin del patriarcado [videoconferencia con la AFP]. Diario El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/cultura/isabel-allende-pandemia-patriarcado-protestas.html>
- CEPAL (2021). *Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe Los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19*. Santiago de Chile.
- PAHO/WHO (2021). *América Latina y el Caribe superan el millón de muertes por COVID-19*. Washington.
- PNUD (2020). *COVID-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual*. Nueva York.